

# EL 23 DE ENERO ENTRE DOS FUEGOS

JESUS M. AGUIRRE

*"Las víctimas en el 23 de Enero son ya más que las del 23 de Enero" Zapata (El Nacional, 10-X-1978)*

Para el lunes 9 de octubre la urbanización del 23 de Enero había sido tomada por la policía metropolitana.

Después de tres días de disturbios iniciados con un ataque de encapuchados a una casilla policial por la escasez de agua en el sector, el saldo fue el siguiente: cuatro jóvenes murieron abaleados, dos policías resultaron heridos por pedradas y botellazos, y se practicaron numerosas detenciones.

El primer muerto fue el menor de 11 años, Willman Bournes, quien recibió un balazo en la frente, cuando su madre lo conducía con otros niños a una habitación de su residencia (bloque 7, sector de Monte Piedad).

A Willman le siguió Ricardo José Antón Rojas de 16 años, quien herido de gravedad el jueves, murió el sábado en el Hospital Universitario.

El mismo sábado, en los nuevos disturbios provocados tras el entierro del escolar Willman Bournes, el joven Nelson José García de 19 años recibió un balazo en la cabeza y murió instantáneamente. Según la policía participaba con una capucha en las "manifestaciones violentas".

Por fin ese mismo día a las siete y media de la noche era inspeccionado por la Policía Técnica Judicial el cadáver de Wilfredo José Boada de 17 años, que presentó herida por arma de fuego, ocasionada, según la policía mientras participaba en una manifestación violenta. La versión de sus parientes señala que Wilfredo se dirigía al abasto a hacerle una compra a su tía, cuando recibió un disparo debajo de la clavícula derecha.

Después de los tres sepelios, efectuados ya en calma, los familiares de las víctimas, según describen los diarios, no quisieron hacer el más mínimo comentario sobre los sucesos. Sólo dijeron: "NUESTROS HIJOS NO ERAN DELINCUENTES..."

Cada vez que hay un muerto en las manifestaciones del 23 de Enero, un silencio extraño sobrecoge a la población que es el blanco de tiro obvio entre los fuegos de los encapuchados apostados con seguridad y los policías que repelen brutalmente desde puntos protegidos.

En ese mutismo de la población civil se suman los silencios de quienes temen represalias por delatar a la policía los nombres de los encapuchados y los silencios de quienes temen ser fichados en los archivos policiales por protestar contra los malos servicios o las muertes de los inocentes.

## BALAS VERSUS PROBLEMAS

Aún estaba fresca la memoria de la muerte de Angélica Martínez acribillada a tiros por la policía. El rostro de la muchacha de 18 años pintado en un muro a la izquierda de la entrada al liceo Manuel Palacios Fajardo y una capillita adosada en la acera, siguen recordando a los estudiantes y a los transeúntes que la muerte acecha sus idas y venidas.

Esta era la última capilla construida, pues existen otras que se han ido erigiendo en años anteriores para dejar constancia en forma de un via-crucis azaroso de los inocentes muertos en la espiral de violencia: Angélica Martínez, Carlos Reina, Alexander Viloría, Carlos Vielma...

Decimos inocentes muertos porque tampoco faltan cruces pintadas allí donde han caído presuntos hampones en la campaña por acabar con la delincuencia o supuestos inadaptados en el plan por imponer la seguridad nacional.

Sólo excepcionalmente se aclaran al público los autores materiales de las muertes, como en el caso de Angélica Martínez, porque en el fondo fluye la batalla política por acaparar la legitimación abierta el 23 de Enero de 1958, en nombre de las clases populares.

Después de cada escaramuza la Gobernación y las fuerzas del orden emiten siempre algún comunicado en que se da por supuesto que no existen motivos justificados para tales acciones "violentas" y que se trata de grupos de inadaptados empeñados en crear zozobra entre la colectividad o entorpecer, como en este caso, el proceso electoral.

Puede ser más que discutible el efecto de estas explicaciones para la opinión pública cuando provienen de sectores cuyas manos sucias han intervenido casual o

intencionalmente en la tortura de Jorge Rodríguez, la masacre de Claro de Luna o, el asesinato de Carmona.

Este tipo de comunicados, al modo de las bombas lacrimógenas sólo tratan de nublar la realidad para ahorrarse el esfuerzo duro de esclarecer los problemas de fondo. Mientras los ascensores no funcionen, la basura se acumule y el agua escasee, los francotiradores blandirán excusas fáciles y manifiestas para sus operativos.

Todos los millones que está gastando el Gobierno en publicidad no son suficientes para convencer a todo el 23 de Enero de que no hay escasez constante de agua en el sector.

Lo que ofende a la población y lo que encrespa hasta el paroxismo a ciertos jóvenes es que se gasta más plata en camuflar las deficiencias de los servicios que en resolverlos realmente. Según algunas estimaciones confiables sobre los costos de la campaña electoral, éstos ascienden a 1.200 millones de bolívares, y es probable que sólo el partido del Gobierno gaste más de 300 millones para maquillar su gestión.

En esta situación la demagogia del voto tiene que mentir sobre la calidad de los servicios, pero la gente del 23 de Enero ve a señoras y niños mendigar agua con tobos y poncheras en un puesto policial (que siempre tiene agua), se entera de que a un hospital como el de Magallanes a veces no llega el agua, y siente los resultados sangrientos de la represión en sus hijos cada vez que se organiza una protesta.

Tal vez no haya suficientes razones para atacar una casilla policial, pero sobran los motivos para indignarse y manifestar enérgicamente, con la misma energía con la que se reprime, cuando durante todo un año los responsables de la gestión pública se distraen en una campaña electorera, descuidando la atención sistemática y prioritaria de los problemas más acuciantes del pueblo.

La raíz de los problemas del 23 de Enero no se encuentra en los supuestos "inadaptados", como dan a entender las medidas represivas, sino en las insuficiencias profundas de una democracia que se estancó evocando un 23 de Enero. ◻